

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



“Al servicio de la justicia y de la paz social”

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA DE DECISIÓN CIVIL**

PROCESO	VERBAL
DEMANDANTE	LUCÍA MEJÍA DE SIERRA
DEMANDADO	MUNICIPIO DE COPACABANA
INSTANCIA	SEGUNDA –APELACIÓN DE AUTO–
PROCEDENCIA	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE BELLO
RADICADO	05088 31 03 002 2020 00245 01 INTERNO 2021-126
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 107
TEMAS	RECHAZO DE LA DEMANDA
DECISIÓN	REVOCA
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Medellín, catorce (14) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Procede el Tribunal a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, frente al auto proferido el día 16 de febrero de 2021 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, mediante el cual se dispuso el rechazo de plano de la presente demanda con pretensión de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, en razón a que el bien objeto del proceso es un bien de propiedad de una entidad de derecho público.

I. ANTECEDENTES

Actuando a través de apoderado judicial, la señora Lucía Mejía de Sierra promovió demanda verbal con pretensión de declaración de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, de una parte del bien inmueble que se identifica con el folio de matrícula inmobiliaria N°01259486 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota, el cual se encuentra ubicado en la Carrera 49 A N°39-82, hoy Carrera 49 A N°39-90 del Barrio Cristo Rey en el Municipio de Copacabana, lote de terreno comprendido por los linderos que se especifican en el libelo genitor y que se identifica

además con la ficha predial N°8123804 y el número catastral 212100100900030000080000000000. Que como consecuencia, se ordene elevar a escritura pública dicha declaración y posterior a ello, se ordene la inscripción del fallo en el folio de matrícula inmobiliaria N°01259486 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Girardota y la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria donde conste la inscripción a favor de la demandante.

En la demanda se cuenta detalladamente la historia de la demandante con respecto al predio objeto del proceso, el cual en la actualidad y desde el año 1991 es propiedad del Municipio de Copacabana, remitiéndose en el relato a cómo inició la posesión con fundamento en la cual reclama pues su cónyuge la compró a quien venía en posesión del bien desde el año 1962.

La acción correspondió por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, agencia judicial que mediante auto de 16 de febrero de 2021 dispuso el rechazo de la demanda, con fundamento en lo que dispone el numeral 4 del artículo 375 del C.G.P., pues la declaración de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público como es el Municipio de Copacabana.

II. LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con la decisión así proferida, formuló la parte demandante recurso de reposición y en subsidio apelación, exponiendo que en el caso concreto es posible que se aplique la excepción en virtud de la cual un bien fiscal puede ser adquirido por prescripción, pues el cónyuge de la demandante, el 13 de noviembre de 1980, compró una posesión de 18 años al señor José de Jesús Meneses, persona cuya posesión inició en el año 1962; y que el inmueble fue adquirido por el Municipio de Copacabana el 10 de abril de 1991, es decir, transcurridos 29 años desde que inició la posesión del señor José de Jesús Meneses, transmitida a Silvio Sierra en virtud de la suma de posesiones, razón por la cual cuando el Municipio de Copacabana adquirió el inmueble, ya se había consumado el derecho de la

demandante, surgiendo entonces su derecho a adquirir el inmueble por prescripción.

Aduce que el rechazo de la demanda alegando que el bien es imprescriptible constituye un prejuzgamiento porque precisamente ese es el problema jurídico que se pretende debatir y resolver en el proceso; solicita así que se reponga la providencia mediante la cual se rechazó de plano la demanda.

El recurso de reposición fue decidido en providencia del 28 de mayo de 2021, en la que luego de una extensa cita jurisprudencial concluye el señor Juez que no hay lugar a reponer la decisión de rechazar de plano la demanda, porque no es cierto que la actora había consumado su derecho de dominio por la vía de la prescripción adquisitiva cuando el demandado adquirió el inmueble y que tampoco es viable que la demandante invoque el Decreto 4100 de 1971 o Código de Procedimiento Civil, porque la Ley posterior que es la Ley 1564 de 2012, reiteró que no podrán ganarse por prescripción los bienes de propiedad de las entidades de derecho público bajo el imperio de esa ley aunque el prescribiente hubiere principiado a poseerla conforme a una ley anterior que autorizaba la prescripción.

III. CONSIDERACIONES

1. DEL EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA.

A fin de garantizar la concurrencia de los presupuestos procesales y así evitar sentencias inhibitorias y nulidades que afecten la validez del trámite, tiene diseñado el estatuto procesal civil una actuación determinante, misma que refiere al estudio de admisibilidad de la demanda y funge como el primer control de legalidad del ruego de tutela judicial. Para el Juez, dicha actuación comporta el ejercicio de un deber-poder que puede dar lugar a la admisión de la causa, a su inadmisión o a su rechazo.

Tanto la inadmisión como el rechazo, tienen en común la no aceptación inicial de la demanda; no obstante, ambas figuras difieren ostensiblemente en sus efectos, dado que la primera comporta el aplazamiento de la aprobación del libelo genitor, previa concesión de oportunidad para la

subsanción de ciertos defectos; mientras que el rechazo supone el *definitivo* desprendimiento de la causa por parte de la autoridad judicial destinataria; por supuesto que el rechazo puede estar precedido de la inadmisión de la demanda.

Sobre la materia que se viene destacando, prevé el artículo 90 del Código General del Proceso:

El juez admitirá la demanda que reúna los requisitos de ley, y le dará el trámite que legalmente le corresponda aunque el demandante haya indicado una vía procesal inadecuada. En la misma providencia el juez deberá integrar el litisconsorcio necesario y ordenarle al demandado que aporte, durante el traslado de la demanda, los documentos que estén en su poder y que hayan sido solicitados por el demandante.

El juez rechazará la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia o cuando esté vencido el término de caducidad para instaurarla. En los dos primeros casos ordenará enviarla con sus anexos al que considere competente; en el último, ordenará devolver los anexos sin necesidad de desglose.

Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

1. Cuando no reúna los requisitos formales.
2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.
3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.
4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.
7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza.

Los recursos contra el auto que rechaza la demanda comprenderán el que negó su admisión. La apelación se concederá en el efecto suspensivo y se resolverá de plano (...)

2. CASO CONCRETO.

En el presente caso, como se detalló en la parte expositiva, acontece que el juzgado de primera instancia rechazó de plano la demanda que con pretensión de declaratoria de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio, presentó la señora Lucía Mejía de Sierra en contra del Municipio de Copacabana, argumentando de entrada que, por tratarse de un bien de propiedad de una entidad de derecho público, situación que no admite

discusión, es un bien imprescriptible por expresa disposición legal.

Pese a lo anterior y a que no admite duda ni la titularidad actual del bien inmueble objeto del proceso, ni la disposición contenida en la regla 4ª del artículo 375 del C.G.P, es lo cierto que mediante la presente acción se está presentando a conocimiento de la jurisdicción una situación que obliga al fallador a estudiar y analizar el contexto jurídico anterior a la prohibición legal de adquirir por prescripción los bienes de propiedad de las entidades de derecho público o bienes fiscales; además de permitir a la parte actora surtir el curso del proceso para que en ejercicio de sus derechos de acceso a la administración de justicia y el de probar, pueda demostrar que se encuentran dadas las condiciones para que en uso de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio se le adjudique la titularidad del bien, laborío que naturalmente no se cumple con la actuación inicial de presentación de la demanda y el siguiente estudio de admisibilidad.

Téngase en cuenta que los hechos que se narran en el libelo genitor son claros en indicar que la demandante pretende beneficiarse de una suma de posesiones que tuvo sus inicios en el año 1962, además, la demanda es nítida al poner de presente todas las situaciones de hecho y de derecho que han ocurrido respecto al bien inmueble objeto del proceso, para soportar con ello que su petición en el sentido que se aplique la excepción jurisprudencialmente permitida frente a la prohibición legal hoy consagrada en el artículo 375 del C.G.P., regla 4ª.

Ahora bien, revisada la actuación el juez a quien correspondió por reparto la causal, estima el Tribunal que no resulta viable avalar su decisión de ocuparse desde la génesis del proceso, de estudiar el fondo de la situación, concluyendo de entrada y sin mayores elementos de prueba, que no aplica aquí la posibilidad de llevar a cabo un juicio de pertenencia porque la demandante no logró consolidar su derecho antes de la adquisición del bien por parte de la entidad de derecho público y porque no hay duda de la titularidad actual del bien, cuando se reitera, es derecho de las personas acceder a la administración de justicia y demostrar por medio de ese derecho – deber de probar, el fundamento de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persiguen, máxime en una situación tan particular como la presente, que obliga a que dentro del debate procesal que

se surte en el desarrollo del juicio y entendido el problema jurídico, se analicen las pruebas y se decida si resulta posible, conforme al estudio del asunto que remonta al origen de la prohibición legal, acceder o no a las pretensiones de la demanda.

Es que como acertadamente lo sostiene el apoderado judicial de la recurrente en este evento se hace necesaria una adecuada comprensión del problema jurídico y un estudio a fondo y en el curso del proceso, por parte de la dependencia judicial, en lo referente a las pretensiones formuladas en la demanda, los hechos que le sirven de fundamento y la evolución legal y jurisprudencial de las demandas de pertenencia respecto a bienes fiscales.

Considera pues el Tribunal que se hizo un temprano estudio del fondo del asunto, pues el mismo se reserva para el momento del fallo, ya que constituye un requisito para obtener una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones.

Para mayor claridad de la situación ocurrida en el presente asunto, resulta pertinente citar el concepto emitido por el Doctrinante Hernando Devis Echandía, el cual sirve para reiterar lo explicado hasta ahora, así:

Para la admisión de la demanda se requiere que no haya duda acerca de las declaraciones que se solicitan o de la condena que se pide contra el demandado o del efecto constitutivo que se persigue, si se trata de juicio de conocimiento; y de la clase y monto de la orden de pago que se busca, si de juicio ejecutivo, o del monto de la deuda y la petición de venta, si es un juicio de venta de cosa hipotecada o dada en prenda, etc. En una palabra: **se requiere que aparezca clara la pretensión, el objeto de la demanda. Mayores exigencias llevarían a supeditar el derecho a la forma, lo que es inaceptable.**

No se trata de que las peticiones sean pertinentes ni de que la existencia o exigibilidad del derecho que se alega resulten evidentes, **puesto esto es materia de la sentencia**, una vez que se conozcan las pruebas y las excepciones del demandado.

En ocasiones, la causa de la obligación objeto de la demanda es inseparable de ella y constituye parte de la determinación de lo que se pide, como sucede, por lo general, en las acciones de condena para el pago de sumas de dinero, especies y perjuicios, **pues no será suficiente decir cuánto y de qué clase debe ser la condena, para que aparezca en forma clara el objeto de la demanda, sino que es indispensable, además, determinar la causa o hecho jurídico de donde se hace derivar esa petición para que el demandado sepa en qué consiste el litigio que se plantea**, a saber: un cierto contrato

mutuo, un precio pendiente de un contrato de venta, una lesión sufrida por determinado acto culposo o doloso, etc. Sin esta precisión, faltaría al cuarto requisito apuntado.

Pero no es necesario que la causa y la petición se redacten en el mismo lugar de la demanda, ni que la una vaya a continuación de la otra, porque la ley no exige que se haga en ningún lugar determinado del libelo.

Tampoco es necesario denominar jurídicamente la petición, es decir, que no hace falta calificar la pretensión que se quiere ejercitar (esto es, la *acción* en sentido material, como algunos dicen); por ejemplo; reivindicatoria, pauliana de nulidad o de simulación, de filiación, de petición de herencia, etc., pues **es suficiente que no haya duda sobre lo que se pide**. E inclusive si el actor usa una denominación inadecuada, no es ello obstáculo para que si el juez encuentra aprobados los hechos y claro el sentido de lo que se pide, se pronuncie favorablemente, desatendiendo tal impropiedad, porque es al juzgador a quien corresponde denominar la acción (mejor dicho, la pretensión) incoada, ya que la naturaleza de esta no depende del nombre que se le dé, sino de los hechos en que se la fundamenta. (...) ¹ (Negritas fuera del texto original)

De manera que, una cosa es que toda demanda con que se pretende iniciar un juicio satisfaga plenamente los requisitos formales exigidos por el legislador para su trámite, y otra, bien distinta, es que las pretensiones así formuladas sean procedentes o no, bien sea porque carecen de fundamento fáctico, jurídico o probatorio.

3. COLOFÓN Y COSTAS.

En definitiva, resulta manifiestamente adecuado revocar la providencia que dispuso el rechazo del libelo genitor por las razones aquí expuestas, por lo que se ordenará al *A quo* realizar un nuevo estudio sobre la admisibilidad de la demanda, y si encuentra pertinente proceda a admitirla, sin que pueda negar su trámite por argumentos similares a los expuestos en la providencia impugnada, teniendo en cuenta para ello la parte motiva de esta providencia.

Por las resultas de este trámite no hay lugar a condenar en costas.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

¹ DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Segunda Edición. Editorial Temis S.A. Bogotá 2009. Pág. 565-566

IV. RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el auto de fecha 16 de febrero de 2021 proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Bello, mediante el cual se dispuso el rechazo de plano de la demanda; ordenando al *A quo* realizar un nuevo estudio sobre la admisibilidad de la demanda, y si encuentra pertinente proceda a admitirla, sin que pueda negar su trámite por argumentos similares a los expuestos en la providencia impugnada, teniendo en cuenta para ello la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. ABSTENERSE de imponer condena en costas.

NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE

MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO

Magistrada

(Firma electrónica conforme al artículo 11 del Decreto 491 de 2020 Ministerio de Justicia y del Derecho)

Firmado Por:

Martha Cecilia Ospina Patiño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 007 Civil

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

a2e9b70f2467b2d60802eee6042479ced64835bc5d4a9a029cab92e50bea5a55

Documento generado en 15/09/2021 03:25:02 p. m.

Valide este documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>